



Declaración en respaldo a la solución política del conflicto armado y a la construcción de la paz en Colombia

La Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico SEPLA expresa su respaldo a las negociaciones de paz que se adelantan entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. La mesa de conversaciones instalada en la Habana expresa un reconocimiento del carácter político del conflicto armado¹, de que el orden social vigente es la realidad explicativa del mismo, y por tanto, la imposibilidad de encontrar una victoria militar para las clases dominantes.

La búsqueda de salidas negociadas ha sido un reclamo histórico de las insurgencias y los movimientos sociales. En tanto, por una parte, permite encontrar caminos para transformar una estructura social excluyente, despojadora, militarista y antidemocrática que niega todas las posibilidades de reproducción de una vida digna para los sectores populares. Y por la otra, permite poner frenos a la profundización de la guerra y el drama humanitario que se desprende de políticas militaristas que buscan una solución por la vía armada.

Los acuerdos alcanzados en la Habana en los puntos de Tierras, Participación Política, Fin del conflicto, Drogas y cultivos de uso ilícito y Víctimas, abren caminos importantes para la materialización de asuntos estratégicos para la luchas democráticas en Colombia y denotan la riqueza de lo allí acordado. De igual modo, lo que se desprenda de las negociaciones en curso sobre el punto seis sobre implementación y verificación. Eje esencial para la territorialización de la paz con perspectiva popular. Por tanto, creemos que el escenario de los post-acuerdos puede generar unas condiciones propicias para la intensificación de las movilizaciones de las organizaciones populares en defensa de sus legítimos intereses y derechos, así como para el despliegue del ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática.

La construcción de la paz es una posibilidad histórica que se abre no solo para el pueblo colombiano sino el de Nuestra América. Así lo entendió con claridad y lucidez el comandante Hugo Chávez y el generoso pueblo de Cuba. De ahí el

¹ Carácter negado durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Administraciones en las que se registra un alto número de violaciones a derechos humanos.

compromiso que siempre han tenido con este proceso, incluso desde las conversaciones exploratorias que condujeron a la instalación de la mesa.

Los desafíos que afronta este proceso en curso en Colombia, son múltiples y de diversos órdenes. Las estructuras paramilitares aún están afianzadas en los territorios y son responsables de la ola de asesinatos, amenazas y persecuciones a líderes y lideresas políticas de izquierda comprometidas con la paz. De ahí, que los acuerdos alcanzados sobre el Fin del conflicto referidos al desmonte del paramilitarismo, el combate a las estructuras criminales y la transformación en la doctrina militar del Estado, resultan fundamentales para poner frenos al desarrollo de la violencia destructiva en los territorios.

Sectores importantes de las clases dominantes vienen desarrollando una intensa campaña en contra del proceso de paz aduciendo que es una violación del orden constitucional y una entrega del país a las FARC. Ocultando bajo este discurso sus verdaderas intenciones, frenar el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la paz, figura acordada en el punto 5 sobre víctimas del conflicto y que tiene entre sus objetivos el esclarecimiento de la verdad sobre causas, orígenes, efectos y responsables del conflicto. En este punto el bloque Uribista puede resultar altamente involucrado. De ahí su campaña por el NO en el plebiscito.

Las garantías de respeto a la vida y de participación en la política legal para los insurgentes que dejen las armas, así como para los presos políticos, es otro asunto que requiere ser tramitado con responsabilidad por el gobierno colombiano. Este proceso no puede abrir espacios para que se repitan procesos de exterminios como el que vivió la Unión Patriótica en la década de los 80 y 90.

Los rediseños institucionales que se requieren para avanzar en las reformas acordadas es otro desafío que se enfrenta el pueblo colombiano en el post-acuerdo. De ahí, el llamado que desde diferentes sectores del movimiento social se ha hecho a una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Estos son, entre otras, algunas cuestiones que deben ser tramitadas para caminar hacia la consolidación de una paz estable y duradera con justicia social como lo persigue el acuerdo general.

Las post-negociaciones se configuran como un campo importante de disputa para el movimiento social y popular colombiano, en tanto implican, por una parte, un momento crucial para exigir el cumplimiento y la materialización de lo acordado entre la insurgencia y el Estado, y por la otra, se perfilan como un escenario estratégico para el reconocimiento y posicionamiento de las agendas de paz que han construido los sectores sociales populares. De ahí la importancia de que los acuerdos puedan ser apropiados por el conjunto del movimiento social latinoamericano. La paz en Colombia permite poner frenos a la agresión imperialista sobre todo el territorio de Nuestra América.

Reconociendo estas cuestiones, diversos sectores de la izquierda colombiana se han articulado en la campaña "La paz sí es contigo" la cual pretende obtener un amplio respaldo popular al plebiscito por la paz y proponer una serie de debates

que abran espacios para las grandes transformaciones que se deben adelantar en los post-acuerdos.

Líderes y lideresas del movimiento social se han involucrado en una gran movilización que pretende alcanzar por los menos 10 millones de votos. De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional del pasado 18 de Julio, se entenderá que la ciudadanía aprueba los acuerdos de paz si se pronuncia por el SI una cantidad mayor al 13% del censo electoral vigente (aproximadamente 4.5 millones de votos). Aunque aún no hay una fecha definida para esta consulta resulta fundamental que desde diferentes sectores del movimiento social sumemos esfuerzos hacia este propósito.

Diversos sectores del movimiento campesino, urbano, juvenil, de mujeres, LGTBI, sindical, entre otros articulados en plataformas sociales como la Marcha Patriótica han jugado un papel protagónico en todo este proceso. Al decir de los y las compañeras el fin del conflicto es un paso fundamental para la profundización de la disputa social con un horizonte anti-capitalista.

En este importante camino a la paz es fundamental que el gobierno colombiano de garantías para la instalación de la mesa con el Ejército de Liberación Nacional ELN. La agenda (1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz; 3. Transformaciones para la paz; 4. Víctimas; 5. Fin del conflicto armado; 6. Implementación) dada a conocer el pasado 30 de Marzo denota la disposición para transitar en este horizonte. En este escenario es importante que sectores de la sociedad y del gobierno colombiano, reconozcan las negociaciones con esta insurgencia como un espacio que complementa los diálogos avanzados con las FARC-EP. Diversos sectores del movimiento social articulados en el Comité de Impulso de la propuesta de Mesa Social por la paz vienen trabajando de manera incansable en este propósito.

Por todo lo anteriormente señalado y en un momento crucial para la concreción de la paz en Colombia la Junta Directiva de la SEPLA convoca a todos sus integrantes, a las organizaciones sociales y políticas con las que actúa y a todos aquellos que quieren la paz con justicia social en Nuestramérica a trabajar activamente para que se concreten los acuerdos de paz en Colombia con las máximas garantías y derechos para todas las partes.

Dado en Nuestramérica el 1 de agosto de 2016